



EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN...
¿HACIA DÓNDE?

Javier Ponce

Quito, agosto de 2005

ÍNDICE

	Página
En tiempos de transición... ¿Hacia dónde?.....	3
La transición política.....	7
Los movimientos sociales.....	8
Las cifras económicas.....	9
Abril, una reflexión entre la esperanza y el realismo.....	12

EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN... ¿HACIA DÓNDE?

En nuestro anexo al último informe de coyuntura de abril 2005, analizamos el cambio de gobierno que se produjo en el Ecuador con la caída de Lucio Gutiérrez y el ascenso del vicepresidente Alfredo Palacio, con lo que, nuevamente, como ocurrió en 1997 y 2000, la clase política ecuatoriana dio paso a una interpretación de la legalidad (no estrictamente ajustada a la Constitución) que impidiera una interrupción del régimen democrático que vive el período más prolongado de nuestra historia republicana (27 años).

Tal como señalábamos en abril, el mandatario Palacio llegaba al poder con muy escasa fuerza y representatividad y con un discurso ambiguo que, en estos meses, como lo señalaremos, ha alcanzado claridad en un par de aspectos, pero continúa como un gobierno débil y con algunas ambivalencias en su conducción.

La debilidad que mencionábamos se ha modificado parcialmente en cuanto ningún sector continúa planteando un adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias que deben realizarse el último trimestre de 2006, lo que aseguraría la permanencia de Palacio hasta enero de 2007; pero tampoco el régimen cuenta con un claro respaldo legislativo y ciudadano.

En cuanto a las demandas de la ciudadanía que generaron el cambio de gobierno, la movilización, circunscrita a la capital, Quito, si bien tenía entre sus virtualidades reunir diversos sectores ciudadanos y responder a demandas éticas de rectificación política, estas virtualidades constituyeron, finalmente sus límites. Y el país llegó al cambio de gobierno sin propuestas, sin un programa mínimo, sin consensos políticos.

Por tanto, nos ratificamos en algunas afirmaciones de abril, como puntos de partida para este análisis de coyuntura:

- a) Si bien el descontento con Gutiérrez fue nacional, el movimiento que lo derrocó fue fundamentalmente de Quito, lo que vuelve que el reconocimiento del nuevo gobierno en el resto del país sea de una aceptación pasiva; las encuestas más serias revelan una “indiferencia” frente al cambio de régimen; cerca del 60 por ciento de los encuestados en dos ciudades, Guayaquil y Quito, coinciden en manifestar que no existe ningún cambio entre el gobierno de Gutiérrez y Palacio, lo que refleja, más que el mantenimiento de una línea de comportamiento gubernamental, una pérdida de esperanza en que la

democracia se reorienta de modo profundo. Sin embargo, hay que recalcar, que esta opinión no toma en cuenta un aspecto importante: el desmantelamiento, por efecto del propio derrocamiento del gobierno, de todo un aparato de persecución y acoso contra comunicadores o líderes de opinión o sociales creó una atmósfera de inseguridad ciudadana con síntomas de un inminente ejercicio dictatorial y totalitario del poder.

- b) El gobierno de Palacio está buscando establecer una línea de conducta que confluya con un buen sector de la ciudadanía, en términos de una posición soberana frente a las presiones norteamericanas satisfechas por Lucio Gutiérrez; organizó un gabinete en el que se destaca el equipo económico que ha planteado un nuevo esquema de políticas económicas que se funda en la atención al gasto social por sobre la política vigente en el gobierno anterior de privilegiar la atención a la deuda externa, asfixiando las políticas sociales.
- c) Inicialmente va ganando en el gobierno la tesis de convocar un amplio diálogo nacional que pueda desembocar en una reforma política a profundidad, pues es evidente que la crisis de abril no tuvo como eje las demandas económicas sino las demandas políticas de la población, la exigencia de un nuevo esquema de representación política; sin embargo esta aspiración se disuelve, primero con la aplicación, por parte del gobierno, de un sistema sui generis de consulta vía internet, que da como resultado la recolección de quince mil observaciones de la más variada índole y sin proceso alguno de maduración de las propuestas a través de la confrontación pública, y luego con la injerencia del Congreso que resuelve tomar en sus manos la ejecución de una reforma política.

Si nos detenemos en esos tres puntos, encontraremos que la falta de reconocimiento nacional del cambio de gobierno ya ha provocado los primeros problemas, con un paro provincial extremadamente radical en Manabí, y permanentes inquietudes en Esmeraldas y en la región amazónica, donde se concentra la explotación petrolera, principal rubro de las exportaciones. A ello se suma que ya se ha vuelto tradicional en el Ecuador el que se provoquen paros y demandas radicales provinciales previo a la definición de candidaturas electorales (en este caso para las elecciones de 2006) pues a través de esos movimientos se “posicionan” los aspirantes al parlamento y las candidaturas presidenciales. Este elemento de inestabilidad se torna una amenaza, dada la debilidad política del gobierno de Palacio.

A lo largo de estos primeros cuatro meses, el gobierno ha ratificado cuatro tendencias iniciales:

1. Ha buscado una mayor independencia frente al conflicto colombiano y a la alianza del presidente Álvaro Uribe y el régimen norteamericano en el

marco del Plan Colombia; a pesar de contactos diplomáticos, se ha profundizado la divergencia entre las cancillerías de los dos países en torno a los temas de fumigación y seguridad fronterizas; por su parte, las organizaciones de derechos humanos ha demandado del gobierno ecuatoriano que se aborden por igual los temas de los refugiados cuya afluencia supera los cálculos de cinco mil anuales y existirían más de cuarenta mil solicitudes de refugio y una población de refugiados que podría superar los cien mil; y ha rechazado el intento del gobierno de Palacio de aplicar un visado a los ciudadanos colombianos a nombre de frenar el ingreso de guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes; igualmente, las organizaciones de derechos humanos reclaman del régimen que busque ampliar su posición de independencia a través de alianzas regionales que fortalezcan dicha posición.

2. Ha concretado en los cambios en materia de política económica los siguientes resultados: el parlamento aprobó una solicitud del gobierno de modificar el destino establecido para los excedentes petroleros, pues hay que recordar que, mientras el precio del petróleo ecuatoriano está por sobre los 40 dólares el barril (con descuentos por calidad e intermediación) el precio establecido para fines del presupuesto nacional es de 28 dólares; esta modificación reorientará recursos que estaban destinados a recompra de deuda pública (externa e interna) hacia programas en educación, salud y desarrollo tecnológico, decisión que ha provocado un franco alejamiento del gobierno con el FMI y el Banco Mundial y un acercamiento al gobierno venezolano para negociar un acuerdo de venta de bonos que permita al Ecuador recibir del gobierno de Hugo Chávez, créditos por hasta 300 millones de dólares; y negociar la posibilidad de un acuerdo para que Venezuela refine a precios favorables el petróleo ecuatoriano, lo que ha puesto en alerta a las multilaterales petroleras que no sólo explotan el petróleo ecuatoriano sino que lo refinan para revenderlos como gasolina y diesel. El próximo paso que prepara el frente económico es la modificación del presupuesto para 2006, de modo de incorporar recursos petroleros al financiamiento presupuestario con un cálculo de no menos de 35 dólares, de modo de evitar parcialmente mayores endeudamientos para financiamiento del gasto público; y avanzar en las asignaciones sociales. Evidentemente que todas esas modificaciones preocupan a quienes priorizan la salud de la macroeconomía frente a la salud social, y a las multilaterales e intermediarias que han aprovechado la ausencia de políticas de Estado en esta materia. Esta oposición vuelve sumamente frágil la posibilidad de que el gobierno profundice en el cambio de modelo en política económica, fragilidad que ya comenzó a manifestarse en los primeros días de agosto con la salida por presiones de sectores del poder financiero y político, del ministro de Economía, autor de las nuevas políticas. Dos son, por tanto,

los primeros síntomas de retrocesos en este campo: la salida del ministro Rafael Correa y la decisión del régimen de no rescindir el contrato con la multinacional Oxy (Occidental) por incumplimientos de ésta, sino buscar una negociación para que permanezca en el país a un contra lo que establecen las leyes en cuanto a las obligaciones de las empresas petroleras. En efecto, la Oxy cedió a otra multinacional sus derechos sobre concesiones petroleras a espaldas del Estado ecuatoriano.

3. Las intenciones de convocar a un amplio diálogo nacional para crear consensos sobre las reformas políticas urgentes, como ya lo señalamos, se van diluyendo, pues tanto el gobierno como el parlamento se resisten a renunciar al “privilegio” de establecer ellos las reglas del juego futuro. De todos modos, existen algunas líneas gruesas de reforma política que van ganando espacio en el debate ciudadano y que deberán ser tomados en cuenta por el Ejecutivo y el Legislativo y sobre las que volveremos más adelante; está pendiente una consulta popular al respecto, convocada para diciembre (que podría no realizarse).

4. En cuanto a otro tema que pesó de manera importante en la caída de Gutiérrez: la creciente desintitucionalización del país, existen algunos pasos que se han dado: el Congreso reestructuró el Tribunal Supremo Electoral, naturalmente con el mismo esquema de representación de los partidos más importantes, con lo que continúa la peligrosa influencia partidista dentro del organismo; una comisión independiente se encuentra analizando un conjunto de trescientos nombres para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, buscando su independencia frente a los partidos y su excelencia profesional e integridad ética, aunque, hasta donde se conoce, el abanico de nombres para la selección no reúne a lo más prestigiado de los juristas del país, pero permitirá superar en lo posible la existencia de cortes de justicia a órdenes de partidos políticos. En cuanto al Tribunal Constitucional, el Congreso no ha dado un solo paso, tampoco en la reestructuración de los organismos de control; y en cuanto a la ratificación del Defensor del Pueblo, esta se produjo en contra del criterio unánime de las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, incluso un organismo que continuaba representando una posición independiente ciudadana, como la Comisión Anticorrupción, ha sido captada por influencias partidistas.

Persiste, por tanto, un saldo negativo en cuanto al fortalecimiento institucional.

LA TRANSICIÓN POLÍTICA

Si bien el régimen de Palacio intenta dejar huella y cambios importantes en materia de política exterior y manejo económico (únicas áreas en las que se vislumbran ideas y acciones relevantes), nos ratificamos en pensar que el Ecuador está asumiendo el nuevo gobierno de Alfredo Palacio como un gobierno de transición, pero no exclusivamente en términos del tiempo que debe durar, para dar paso a nuevas elecciones, sino en cuanto durante este gobierno se reformule la democracia ecuatoriana, a través de la reforma política.

Sin embargo, en cuanto al movimiento social que desató la protesta, es difícil esperar que pueda adoptar estructuras mínimas para cumplir con una acción de veeduría sobre los actos del nuevo régimen y del parlamento e imponer un programa de reformas políticas que vaya más allá de los afanes de maquillar la gobernabilidad que alimentan los parlamentarios y el gobierno. Los movimientos espontáneos de abril, como ya lo señalamos, tienen la virtud de establecer la crítica de los sistemas al margen de todo cálculo político, pero se apagan pronto.

Las propuestas más importantes en cuanto a la reforma política abordan los siguientes campos:

- a) La representación política. Se trata de modificar el sistema electoral vigente, las formas de selección de los candidatos a representantes en el parlamento por parte de los partidos y al financiamiento de las campañas electorales y el acceso equitativo a los medios de comunicación.
- b) La administración territorial. Se trata de profundizar un modelo de descentralización del Estado que apenas se ha puesto en marcha y que incluiría el establecimiento de un régimen de autonomías que permita superar la confrontación regional que ha caracterizado la historia del Ecuador.
- c) La independencia de poderes. Se busca la total independencia de influencias de los partidos políticos, tanto en la Corte Suprema de Justicia y en todo el aparato judicial, como en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral y la Contraloría General del Estado.
- d) La participación ciudadana. Se trata de avanzar en los adelantos que se alcanzaron en la Constitución de 1998 en cuanto a los derechos ciudadanos y de los sectores que viven históricamente en desventaja como son los niños, las mujeres, los indígenas, los afroecuatorianos; y generar instrumentos que permitan una más efectiva participación ciudadana en las decisiones del Estado, la transparencia de la información, la rendición social de cuentas y la revocatoria del mandato,

particularmente en el caso de los gobiernos locales y las instituciones descentralizadas.

- e) El modelo económico. Busca la superación de un modelo neoliberal que ha aplicado la política de ajustes, de privilegiar las cifras macroeconómicas y la deuda externa, de acuerdo a los mandatos de las entidades multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un modelo en crisis en toda América Latina. Interesa un replanteamiento del comportamiento del país frente a la deuda externa.
- f) Reformas de maquillaje. La élite política ha propuesto reformas que modifican exclusivamente los aspectos cosméticos de la gobernabilidad, tales como dividir el Congreso en dos cámaras, modificar las atribuciones del Ejecutivo, fortalecer el régimen de partidos políticos, etc. El peligro actual es que se privilegien esas reformas superficiales y la reforma política quede, nuevamente, postergada. La falta de expectativas y el desaliento ciudadano señalado en párrafos anteriores, puede influir para que, finalmente, la reforma política se disuelva en cambios de maquillaje.
- g) Las propuestas no abordan una necesaria reestructuración administrativa del Estado, que evite duplicación de instancias, creación de espacios de corrupción y se ordene estableciendo políticas de Estado permanentes.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Como ya señalamos, los movimientos sociales no han concretado un proyecto de cambio en la actual coyuntura. No tuvieron protagonismo en las movilizaciones de abril y tampoco han presionado por un diálogo político para enfrentar la crisis y transición vivida en los últimos meses.

El movimiento indígena, al parecer, soporta todavía desacuerdos internos y una profunda desmovilización. Si bien consiguió superar los intentos de disolución emprendidos por el gobierno de Gutiérrez al final del mandato, la CONAIE se encuentra en un peligroso estancamiento, al tiempo que los dos movimientos paralelos tampoco se expresan en la coyuntura: la FEINE, de signo evangélico, que se sumó a la agonía de Gutiérrez en un gesto suicida, vive una polémica interna entre el sector “más puro” del movimiento y la dirigencia que pactó con Gutiérrez; y la FENOCIN mantiene su situación más o menos estable, consolidada en su interior, pero sin un crecimiento significativo de su ámbito de influencia en el movimiento social y campesino en particular.

Mientras tanto, el movimiento político fraterno de la CONAIE, Pachakutik, luego de haber mantenido una prolongada alianza parlamentaria con la derecha y la socialdemocracia, en función de consolidar una oposición al régimen de Gutiérrez, comienza a mirar, por el momento, exclusivamente hacia el escenario electoral del próximo año.

Uno de los sectores que mayor presión está ejerciendo, con frecuentes pronunciamientos, es el conjunto de organizaciones de derechos humanos o las que se ocupan de las migraciones, en el tema relacionado con la población refugiada de Colombia y el conflicto en la frontera norte. Igualmente, van posicionándose organizaciones como Ruptura de los 25, Democracia Ahora, Participación Ciudadana, Jubileo 2000, que buscan crear espacios para la participación y la incidencia política por parte de los ciudadanos, especialmente los jóvenes.

Últimamente, la tramitación de una reforma a la Ley de Seguridad Social para permitir la devolución de los llamados fondos de reserva (teóricamente un ahorro de los afiliados para su edad de jubilación), generó movilizaciones públicas pero que fueron manipuladas por uno de los partidos políticos partícipes en el régimen de Lucio Gutiérrez, el Movimiento Popular Democrático, MPD.

LAS CIFRAS ECONÓMICAS

La coyuntura económica ha estado, en estos meses, marcada por los cambios de orientación en el gobierno que, a este mes de agosto, todavía no se consolidan. Si bien los excedentes petroleros se decidió destinarlos a políticas sociales y apoyo a la producción, no aparecen con claridad en el gobierno propuestas innovadoras y que ataquen la raíz de algunos problemas básicos; los recursos, que pueden sumar decenas de millones de dólares, pueden acabar fortaleciendo líneas de política social y productiva agotadas o paliativas, o reanimar mecanismos agotados o despilfarradores de los recursos nacionales como el Banco Nacional de Fomento responsable del crédito estatal para la producción, pero conducido por intereses personales, políticos coyunturales y clientelares.

El efecto más interesante del cambio de orientación, es haber ampliado el horizonte de alianzas económicas mirando más hacia América Latina que hacia Estados Unidos y su andamiaje multilateral (Banco Mundial, FMI, BID). Ese cambio de orientación podría estar dando sus frutos en los próximos meses a partir del interés de Venezuela por adquirir bonos de deuda

ecuatorianos por alrededor de 300 millones de dólares, lo que produciría dos “alivios”: contrarrestar la negativa dada en las últimas semanas por el FMI y el Banco Mundial a las solicitudes de crédito para equilibrar el presupuesto estatal; y reemplazar endeudamientos internos que asfixian al Estado por la estrechez de los plazos. El apoyo venezolano, como ya indicamos, se complementaría en 2006 con el acuerdo para refinar petróleo ecuatoriano en condiciones ampliamente ventajosas. Pero si bien no se ven con claridad las políticas sociales futuras, la fragilidad viene también por la marcada oposición al ahora ex ministro de Economía, orquestada por intereses petroleros, de tenedores de deuda y por los medios de comunicación que realizan un sutil boicot a las decisiones gubernamentales; y por la fragilidad del propio presidente de la República, de quien se puede esperar un renunciamento, en cualquier momento, a sus políticas económicas, del mismo modo como acaba de ceder los intereses de la mayor multinacional petrolera con presencia en el Ecuador, la Occidental, que violó la legislación en la materia; pero el gobierno, lejos de tomar una posición soberana en este caso, ha destituido al presidente de la petrolera estatal ecuatoriana por demandar la caducidad del contrato con esta multinacional por incumplimiento.

Mientras tanto, la economía sigue anclada en dos recursos: los altos precios del petróleo que le benefician a pesar de la caída de la producción nacional y los costos que significan el depender de importaciones de gasolina y gas, y las remesas de los emigrantes. Mientras el petróleo sostuvo una cifra de seis por ciento de crecimiento en el año 2004, la agricultura creció cero por ciento y la industria bordeó el tres por ciento. Se trata, por tanto, de una recesión oculta tras el petróleo y las remesas.

La caída de la inflación, uno de los escasos efectos positivos de la dolarización, se mantiene con un muy ligero incremento con respecto al año pasado y cerrará este 2005 en alrededor de un dos por ciento. Sin embargo, los salarios promedio que tienen como base 280 dólares, no le permiten a cerca del 50% de la población alcanzar a una canasta básica calculada por el Instituto de Estadísticas y Censos en 426 dólares para el mes de julio pasado.

En el Ecuador resulta difícil predecir los futuros económicos inmediatos, no sólo por depender de factores exógenos como el precio internacional del petróleo, sino porque las cifras y los programas que se aplican carecen de sustento y de credibilidad, no existen informaciones uniformes en el sector estatal. Esto lo decimos, porque el tema de la economía popular desde hace dos meses ha sido la demagógica decisión del Congreso de devolver los fondos de reserva ahorrados en el Instituto de Seguridad Social por un millón novecientos mil afiliados, decisión que ha provocado presagios de tormenta y cálculos que hablan de un impacto devastador en las finanzas estatales, pero a partir de cifras muy diversas. Y es que el caso del Instituto de Seguridad Social es emblemático de la crisis de las instituciones en el Ecuador; estas

se manejan con criterios políticos de partido, sin un sustento técnico suficiente, con una deficiencia escandalosa en los servicios; y además, gracias a los importantes recursos que capta de lo afiliados, se ha convertido en el mayor proveedor de recursos para el gobierno central, vía préstamos, para salvar apuros y desequilibrios presupuestarios. Finalmente, en este y otros casos, sólo cuando el impacto de las medidas tomadas apresuradamente y sin criterios claros ocurra, visualizamos la gravedad de ciertas decisiones políticas. El Ecuador se ha habituado, de este modo, a no prever los hechos económicos, sino a lamentarlos pasado el tiempo.

Uno de los claros ejemplos de lo dicho, es la constatación póstuma de los efectos de un lento y camuflado desmantelamiento del sector social público ocurrido a lo largo de una década, que se expresa ahora en un inusitado incremento de enfermedades en buena parte erradicadas como el dengue, el paludismo y la hepatitis, producidas por las pésimas condiciones de vida en los sectores más pobres urbanos y rurales; o en las cifras preocupantes de deserción escolar provocadas por la necesidad de trabajar, de más de doscientos mil niños y jóvenes en el último año escolar.

En síntesis, en ausencia de una propuesta de los movimientos y organizaciones sociales que marquen la actual coyuntura, lo previsible será una culminación del año 2005 en medio de la pugna por profundizar o desmantelar las actuales políticas económicas del régimen que están privilegiando lo social y la mirada hacia alianzas regionales latinoamericanas (con excepción de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador, Perú y Colombia con Estados Unidos que continúan avanzando); las expectativas políticas que podrá generar el proceso de reformas que, con escasa participación de la ciudadanía será el tema dominante del gobierno y del parlamento; las incertidumbres que genera la política del eje Uribe-Bush en la frontera norte y la posibilidad de que el gobierno ecuatoriano pueda sostener su posición de no involucración en el Plan Colombia, matizado por el drama, cada vez más agudo, de la afluencia de refugiados colombianos; y finalmente las manifestaciones del desacuerdo social que en las distintas coyunturas brotan desde diversos sectores, tal el caso del reavivamiento de los conflictos entre las poblaciones amazónicas y algunas petroleras, particularmente Petrobras con presencia en una zona de reserva natural habitada por pueblos indígenas.

ABRIL, UNA REFLEXIÓN ENTRE LA ESPERANZA Y EL REALISMO

Flota en el ambiente, en los actuales momentos, un interrogante: el impacto social y político de las movilizaciones de abril que dieron origen a la actual coyuntura de transición. Pensamos que es importante detenerse a reflexionar lo ocurrido.

Un primer intento de algunas organizaciones sociales por dotar de alguna forma estructurada de representación a la expresión espontánea en buena parte de sectores medios y jóvenes, no ha tenido ninguna perspectiva, por la naturaleza misma de las movilizaciones de abril que no tuvo voceros ni líderes, ni tampoco los necesitó para expresarse como forma de rechazo a la corrupción política.

Si fracasan los intentos por institucionalizar los impactos de abril, eso se debe también al carácter indescifrable de una revuelta que no tiene nombres, que no tiene cuerpo. Que fue, intentando una metáfora que tiene que ver con el sentido etimológico de la palabra con la que se identificaron los manifestantes –forajidos-*, un viento que se originó en los extramuros de la participación política y sopló a través de la ciudadela del poder.

Quizá, la mejor manera de aprovechar esa rebelión es olvidando sus hechos (porque ya estamos viviendo el riesgo de que, por guardar memoria de ellos, levantemos monumentos en su recuerdo); para de ese modo, olvidándolos, esa corriente de aire que provocó, ocurra, pase, traspase, oxigene a la sociedad política.

Es curioso constatar un efecto subjetivo de abril: la mirada ciudadana sobre el ejercicio de la política ya no es la misma. El Congreso sigue siendo ese entrampamiento que constantemente traiciona la representación, pero la mirada de las gentes ya no es la misma. Los mismos gestos con los que el presidente Palacio o el congreso acompañan a sus propuestas de asambleas y de consulta popular, a pesar de que no alcanzan para descifrar lo que ocurre en realidad, denotan que para ellos ya no es posible continuar hablando a nombre de un pueblo invisible, fantasmal, inexistente, inventado en el discurso.

Hay una mirada que se ha modificado, una mirada que traspasa la escena, una mirada que dejó de ser silenciosa, puramente expectante.

* Este término se acuñó de modo novedoso: en los estertores del gobierno, Gutiérrez calificó despectivamente a los jóvenes que se expresaban en las calles como “forajidos”, y los manifestantes, lejos de ofenderse, asumieron este término como su identificación.

Existe más de una forma de resistencia: aquella resistencia que se expresa ignorando la política, lo que si bien puede interpretarse como indiferencia que deja a la clase política todo el poder, pero que es una resistencia que socava, con la indiferencia, las bases del ejercicio del poder (de allí tal vez su enorme fragilidad y volatilidad); pero hay la resistencia que se expresa en los sub códigos, en los códigos subterráneos que emergieron en abril de manera indescifrable. Precisamente por su carácter de códigos. Fue una resistencia que ocupó el escenario para permitir que corra viento por un escenario viciado, cargado de aire contaminado.

Allí radica la potencial capacidad de cambio de estos movimientos espontáneos y que se nos escapan de las manos: dejar las puertas de la ciudadela del poder abiertas, para que de tiempo en tiempo el viento sople y en su terquedad vaya abriendo brechas, ventilando los partidos y los liderazgos. Los movimientos de abril, entre otras razones por estar encerrados en Quito, no generan nuevos partidos ni nuevos líderes. Ni hay nada extraordinario que refundar. El Ecuador sigue siendo el mismo país que diariamente se niega a sí mismo, se olvida de sí mismo.

Las exigencias, originadas en sectores académicos o no gubernamentales de control social sobre los hechos políticos, evidentemente que se fortalecieron en abril, porque las movilizaciones legitimaron algunas de sus causas, pero no son reconocidas en su plena legitimidad ni por las poblaciones ni por los partidos y la clase política.

El gobierno, sintiéndose fruto de las movilizaciones de abril, y el Congreso, convencido de que se ha autodepurado porque ha expulsado a algunos de los legisladores que participaron en los hechos inconstitucionales protagonizados por la mayoría favorable a Lucio Gutiérrez, quiere retomar el protagonismo político rechazado en abril y debatir las reformas constitucionales e interpretar las demandas estrictamente políticas de abril. La reforma constitucional puede remozar ciertos mecanismos, pero no es de eso de lo que corresponde hablar si buscamos entresacar lecciones de las jornadas de abril, que se diferenciaron de otras, como la que provocó la caída de Abdalá Bucaram en 1997. Allí, las grandes manifestaciones en Quito eran solamente el telón de fondo de lo que se fraguaba en el Congreso. Nada más. Hoy, han regresado los mismos al poder, con alguna excepción. No son diferentes. Algunos de los ministros y el propio vicepresidente de la República son rémoras del pasado político. Regresan los mismos a pesar de las palabras, de aquellas que pedían en abril que se vayan todos. Sin embargo, en cierta forma se han ido todos. Hay un profundo vacío en el poder y no se trata que lo llene aquella espontaneidad de los llamados forajidos. Son ellos mismos, los partidos, los que deberán intentarlo. Nadie va a tomarles la posta. Por el momento, están repitiendo los mismos actos, pero lo hacen huecos por dentro. Y ese “que se vayan todos” que recuerda la crisis argentina de hace ya algunos meses que se selló con el retorno del

peronismo, abarca también las ideas, las agendas, las propuestas, los intereses de los miembros de ese sector de la ahora llamada “alta sociedad civil” que sí ha vivido dentro de la ciudadela del poder, y ha compartido la responsabilidad de lo ocurrido hasta aquí.

Nos animamos a afirmar que esas palabras “que se vayan todos”, tampoco anunciaron la proximidad de lo distinto.